CC BY SA

ATLÁNTICAS – Revista Internacional de Estudios Feministas, 2025, 10, 2, 2-9
ISSN: 2530-2736 https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.12381

Entrevista a Mª Luisa Balaguer Callejón

Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y Magistrada del Tribunal Constitucional de España.



Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga, ha ejercido como abogada y ha sido integrante del Consejo Jurídico Consultivo de Andalucía. Nombrada en marzo de 2017 a propuesta del Senado como Magistrada del Tribunal Constitucional español, su labor la ha consolidado como una referencia imprescindible en la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres desde la perspectiva constitucional. En este sentido ha recibido distintos reconocimientos a lo largo de su trayectoria académica y profesional, entre los que cabe destacar: Premio Meridiana, otorgado por el Instituto Andaluz de la Mujer, por su contribución a la igualdad de género; Medalla de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria jurídica y académica; Premio Clara Campoamor por su defensa de la igualdad, Reconocimiento de la Asociación de Mujeres Juristas Themis por su labor en el ámbito jurídico; Premio Constitución de la Red Feminista de Derecho Constitucional y Doctora Honoris Causa por la Universidad de Málaga.

Mar Esquembre Cerdá es Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y cofundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Entre sus líneas de investigación destacan sus propuestas para las reformas en la metodología de investigación y enseñanza del Derecho Constitucional con la incorporación de las teorías feministas. ORCID: 0000-0001-5157-4467

Cómo citar este artículo: Esquembre Cerdá, Mar (2025). Entrevista a la catedrática Mª Luisa Balaguer Callejón. *Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas*, 10 (2), 2-9. doi: https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.12381

Rev. Atlánticas: **Muchas gracias por concedernos esta entrevista para el monográfico de Atlánticas sobre Constitucionalismo y Feminismo. Es un honor poder conversar con usted, dada su extensa trayectoria académica y profesional en este ámbito y su inestimable contribución al mismo. En su carrera académica y como integrante del Consejo Jurídico Consultivo de Andalucía y magistrada del Tribunal Constitucional español, ha abordado extensamente la relación entre constitucionalismo y feminismo. Considerando las tensiones entre el universalismo constitucional clásico y las demandas de reconocimiento de la diferencia, ¿podríamos hablar de un "constitucionalismo feminista" como corriente teórica distintiva? ¿Qué elementos definitorios tendría esta aproximación y cómo dialogaría con otras corrientes constitucionales contemporáneas?**

Mª Luisa Balaguer: Creo que sí, desde el derecho se puede decir hoy que, por parte de una generación de constitucionalistas postconstitucionales, se ha venido atendiendo a una demanda normativa que exigía integrar a las mujeres en contextos jurídicos que eran ajenos a esa sensibilidad. Cuando se aprueba la Constitución Española de 1978, son todavía pocas las mujeres que se relacionan con el derecho, desde abogadas en ejercicio hasta juezas o los escasos cargos públicos ocupados por ellas.

Así que se podría hablar de un constitucionalismo emergente, a partir sobre todo de la década de los ochenta, donde los estudios del derecho, en forma de tesis doctorales o de publicaciones temáticas relacionadas con las ciencias sociales, inician un tratamiento en el que se incluye la exigencia de la igualdad, bien desde el art. 14 CE o desde el 9.2, referido ya a grupos sociales concretos.

Respecto de la inserción que el feminismo tuviera en esos momentos iniciales, creo que es posible esa correlación desde los movimientos que en nuestro Estado surgen desde la transición política, y que se relacionan efectivamente con fórmulas democráticas más precisas, como los partidos políticos o los grupos de presión, organizaciones sindicales y asociaciones profesionales u otras. Y en ese sentido, habría un suelo de reivindicación democrática como la libertad de expresión, el pluralismo político, los derechos relacionados con la participación política o ciudadana, y unas específicas formas de acción política y social, que podrían insertarse en esos marcos reivindicativos más generales.

Rev. Atlánticas: **Fue designada Magistrada del Tribunal Constitucional español por el Senado el 8 de marzo de 2017. En su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de dicha Cámara recordaba que en 2004 empezó escribir un libro sobre igualdad en el que no podía avanzar intelectualmente porque "estaba pesando siempre la igualdad de género" y decidió abandonar ese libro y escribir sobre la construcción jurídica del género. El resultado se plasmó en la monografía *Mujer y Constitución: la construcción jurídica del***

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-9
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.12381

género **(ed. Cátedra, 2005), que marcó un hito en la literatura jurídica española al analizar cómo el derecho participa en la construcción social del género. Casi dos décadas después de su publicación, ¿qué aspectos de su análisis considera que han sido incorporados en la cultura jurídica española, ¿cuáles permanecen como asignaturas pendientes y qué nuevos desafíos teóricos han surgido, que requieran una revisión o ampliación de sus planteamientos originales?**

Mª Luisa Balaguer: Pues esta pregunta tendría una continuidad respecto de la contestación a la primera pregunta. Es cierto que la Constitución Española declara el art. 14 como el derecho a la igualdad de los españoles, con independencia de cualquier discriminación derivada de cualquier tipo de condición o circunstancia, y es esa amplitud del precepto, la que nos permite la entrada al sexo como factor prohibido de discriminación. Pero más allá de la textualidad del art. 14, lo importante es analizar cómo se ha desarrollado la jurisprudencia y la legislación derivadas de ese reconocimiento constitucional. Y en el año en el que se publica el libro que mencionas, todavía no contábamos con normas específicas de interdicción de la desigualdad, ni los mecanismos de igualdad compensatoria, leyes orgánicas sobre la violencia de género (la de medidas integrales contra la violencia de género se aprobó a finales de diciembre de 2004), o regulación de los derechos derivados del acoso sexual, e incluso de participación política mediante las cuotas electorales o la paridad en los órganos de representación.

De este modo, el libro intenta analizar si en esos años se podía hablar de un desarrollo constitucional de la construcción de la igualdad, o por el contrario, las leyes posconstitucionales seguían mostrando un sesgo de género que exigían una militancia feminista que reivindicara estos derechos de la misma forma que lo hacían otras instancias sociales y políticas, respecto de sus derechos.

Desde entonces hasta ahora ha de reconocerse un avance muy significativo de los derechos de igualdad de género entre mujeres y hombres, en el que los gobiernos progresistas han sido receptivos a la palabra de las mujeres, de manera que desde el punto de vista legislativo y formal, puede considerarse que se ha evolucionado mucho. Ello no impide considerar las dos grandes ausencias de regulación normativa respecto de los vientres de alquiler y la prostitución, que pese a ir en la agenda de los partidos políticos progresistas, no consigue materializarse.

Rev. Atlánticas: **La interpretación constitucional tradicional suele presentarse como neutral frente al género, mientras que usted ha emitido más de 150 votos particulares durante su mandato en el Tribunal Constitucional, muchos señalando la ausencia de perspectiva de género. Considerando que esta expresión apenas aparece en cuatro sentencias recientes (SSTC 44/2023, 48/2024, 89/2024 y 92/2024), ¿qué resistencias epistemológicas, metodológicas e ideológicas ha identificado para su aplicación en la justicia constitucional y**

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-9
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.12381

cómo se manifiestan en las deliberaciones y en la construcción argumentativa de las sentencias? Si aceptamos que la pretendida neutralidad puede ocultar sesgos androcéntricos, ¿podría argumentarse que esta ausencia sistemática constituye en sí misma una discriminación estructural por razón de sexo contraria al artículo 14 de la Constitución? ¿Qué implicaciones tendría este reconocimiento para transformar la práctica judicial?

Mª Luisa Balaguer: Esos votos particulares efectivamente se refieren a menudo a recursos de amparo formulados por mujeres que han visto lesionados sus derechos como consecuencia de actos de violencia de género, o de discriminación de género cuya consecuencia las ha situado en posiciones de inferioridad, y en ese sentido, he tenido ocasión de formular votos particulares en contra de la sentencia, pero también y muy a menudo en casos que votando a favor de la sentencia, entendía que no se llegaba a formular en toda su extensión la idea de igualdad de género que, a mi juicio, la Constitución exige. Y es verdad también que a menudo ello obedece a exigencias interpretativas que en el Tribunal Constitucional no son aplicadas algunas veces. A mi entender, las normas constitucionales son más abiertas en general, que el derecho infraconstitucional, y esto es razonable si tenemos en cuenta que frente a los órdenes jurisdiccionales comprendidos en nuestro ordenamiento jurídico, las normas constitucionales son de mayor apertura, y por lo tanto, a veces se relacionan de manera más expansiva, y el intérprete constitucional, por lo tanto, ha de intentar abarcar un mayor campo semántico y una mayor abstracción y generalidad que permita la subsunción de algunos elementos normativos en algún supuesto de hecho que en apariencia no estuviera comprendido en el caso. Pondré un ejemplo que el Tribunal utiliza frecuentemente al hablar de algunos principios o valores, que están constitucionalizados en principio como criterios interpretativos, y sin embargo acaban determinando la sentencia como si en realidad fueran derechos y no criterios de aplicación. Y esto es posible porque la actividad interpretativa acaba finalmente constituyendo un proceso encadenado en el que algunos elementos interfieren en otros.

De modo que cuando hablamos de perspectiva de género estamos ante la obligación de los poderes públicos de integrar en su actividad interpretativa, un elemento que condiciona la aplicación de la norma, y que, de no realizarse la interpretación de las normas, integrando ese factor, el resultado sería lesivo para las mujeres, más allá del caso concreto sometido a enjuiciamiento.

De ahí la importancia que tiene para el avance de la igualdad, que la práctica judicial se lleve a cabo con todos los elementos de juicio que exigen las leyes, también la LO 372007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres donde se exige justamente la interpretación y aplicación de las normas desde la perspectiva de género.

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-9
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.12381

Rev. Atlánticas: **A pesar de los avances formales, la paridad en instituciones como el Tribunal Constitucional sigue siendo un desafío pendiente. Desde su doble experiencia como académica y magistrada, ¿qué mecanismos institucionales y culturales continúan operando como barreras para la plena participación de las mujeres en los altos órganos constitucionales? ¿Serían suficientes las reformas legislativas para transformar estas dinámicas o se requieren cambios más profundos en la cultura jurídica?**

Mª Luisa Balaguer: Completamente de acuerdo con la resistencia a la igualdad que desde los mecanismos de nombramiento han venido obstaculizando el cumplimiento de estos preceptos, y de que en ellos se forma la barrera que impide que todavía muchos de esos nombramientos ignoren la normativa, por otra parte muy clara, de paridad en la participación política de órganos constitucionales e institucionales, y desde luego esta situación está solamente en la voluntad de los legisladores, porque caben mecanismos de corrección muy claros y están en otras leyes de participación proporcional como la primera que se hizo mediante la modificación de la Ley Electoral General para insertar el sistema de las cuotas representativas por los porcentajes de 60-40 por ciento.
En aquel momento, la primera lista electoral que incumplió esta exigencia fue inadmitida por la Junta Electoral correspondiente y el Tribunal Constitucional dictó la primera sentencia de aplicación de la ley. En cambio, otras leyes posteriores no han previsto consecuencias de ningún tipo para anular nombramientos que no respeten la paridad, es de suponer porque no están muy interesados en que se lleve a cabo de manera coercitiva.

Rev. Atlánticas: **El análisis feminista contemporáneo ha incorporado la perspectiva de la interseccionalidad, reconociendo cómo diferentes ejes de opresión se entrelazan y generan experiencias específicas de discriminación. ¿De qué manera podría la doctrina constitucional española integrar este enfoque interseccional sin fragmentar excesivamente la protección jurídica? ¿Cómo podría reflejarse concretamente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para abordar casos donde confluyen discriminaciones por razón de género, origen étnico, clase social u otros factores?**

Mª Luisa Balaguer: Es posible que al sexo se unan determinados factores de discriminación como la renta, el origen, u otros condicionantes o grupos, pero en una sentencia de un tribunal, no solamente constitucional, creo que pueden ser perfectamente diferenciables estos factores personales, en la medida en que al tratarse de una justicia rogada, será la parte actora del procedimiento la llamada a invocar estos elementos discriminatorios, describiendo los hechos concretos y las normas de cobertura de los derechos lesionados. Más allá de esa circunstancia, un tanto teórica, es cierto que en la práctica no es fácil determinar qué derecho

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-9
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.12381

estaría o no en condiciones de prevalecer sobre el otro. Puede pensarse en un procedimiento en el que se cruce la condición social de la persona, con la cuota de género, en un puesto de trabajo en el que se deban valorar ambas posiciones. Pero en una situación de este tipo, necesariamente la valoración tiene que ser del caso concreto, porque no tenemos categorías generalizadas.

Rev. Atlánticas: **El texto constitucional de 1978, redactado en un contexto histórico y social muy diferente al actual, presenta tanto oportunidades como limitaciones para una interpretación feminista. Considerando su experiencia como intérprete constitucional, ¿qué potencial transformador identifica en la Constitución española vigente para avanzar en la igualdad sustantiva? ¿Qué aspectos considera que requieren necesariamente una reforma constitucional y cuáles podrían abordarse mediante una reinterpretación evolutiva? ¿Qué innovaciones doctrinales o metodológicas considera más prometedoras para avanzar hacia un constitucionalismo genuinamente inclusivo?**

Mª Luisa Balaguer: Una reforma constitucional es necesaria, prácticamente desde los primeros años, porque fue fruto del consenso y por lo tanto no satisfizo de manera total a la población, pero también desde la academia, donde hemos publicado muchos trabajos sobre la exigencia de una reforma, no solamente en el plano de los derechos fundamentales, sino también territorial e institucional, porque no se puede olvidar que la Constitución española de 1978 fue *analógica* en tanto que hoy el derecho es *digital*.

Desde una posición integradora, debemos ser realistas y entender que si las mujeres hemos avanzado en derechos, lo razonable sería constitucionalizar al menos algunos de ellos, para que sea difícil revertirlos en el caso en que fuerzas políticas más conservadoras que las que han legislado estas leyes, llegasen a gobernar. Si esto es así, el derecho al aborto, se justificaría desde un reconocimiento del derecho fundamental a la disposición del propio cuerpo, los derechos relacionados con el reconocimiento de la paternidad, o el establecimiento de una mayoría de edad quizás más temprana para el ejercicio del derecho al voto. Algunos de estos derechos ni siquiera exigirían una reforma de la Constitución, sino que podrían ser abordados desde leyes orgánicas.

Pero en todo caso, como bien destacas, la interpretación constitucional exigente con una sociedad evolutiva, favorece la teoría constructivista del derecho, porque reconoce los avances, no solo de las sociedades actuales, sino del propio campo interpretativo que proporcional el acervo de las resoluciones de nuestro tribunal y de los homólogos europeos, pero también de nuestra doctrina constitucionalista a la que nos hemos adscrito quienes seguimos a nuestros maestros desde Carlos de Cabo en España, hasta Ferrajoli en Italia.

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-9
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.12381

Rev. Atlánticas: **La Constitución Española configura muchos derechos sociales y económicos como principios rectores con limitada exigibilidad judicial directa. Considerando que las mujeres soportan de manera desproporcionada cargas como la pobreza, la precariedad laboral y los trabajos de cuidados no remunerados, ¿cómo afecta esta configuración constitucional a la igualdad efectiva? ¿Qué interpretación del Estado Social recogido en el artículo 1.1 CE permitiría fortalecer la protección de estos derechos desde una perspectiva feminista?**

Mª Luisa Balaguer: Es cierto que el art. 1.1 señala con toda claridad nuestro modelo de Estado, y por lo tanto, no es el nuestro un Estado liberal, porque el constituyente formula en ese momento histórico de 1978, el modelo que después de la Segunda Guerra Mundial se impone en Europa y que constituye precisamente el Estado social que permite los pactos de la posguerra entre el trabajo y el capital, magistralmente formulado por el profesor Carlos de Cabo en sus trabajos.
De manera que no podemos sustraernos a este condicionante que, por otra parte, ha sido capaz de pacificar los conflictos desde los años sesenta del pasado siglo hasta la actualidad. Ahora bien, también tenemos que entender que las mujeres tuvimos una intervención apenas testimonial, y ha sido necesaria la creación de un potente movimiento feminista para que, desde la transición hasta hoy, y no sin avances y retrocesos, se pueda hablar de algunos derechos consolidados en estas décadas. Pero es importante también considerar que esos avances en algunos derechos están de facto obstaculizados en su desarrollo, y además pueden ser revertidos en el futuro.

Rev. Atlánticas: **La eficacia normativa de los mandatos constitucionales de igualdad se ve frecuentemente condicionada por factores extrajurídicos como las dinámicas económicas globales, las políticas de austeridad o las crisis cíclicas del capitalismo. Desde su experiencia en la academia y en la jurisdicción constitucional, ¿qué mecanismos jurídico-constitucionales podrían desarrollarse para garantizar que las políticas de igualdad mantengan su vigencia y efectividad incluso en contextos de restricciones presupuestarias? ¿Cómo podría reinterpretarse el principio de estabilidad presupuestaria (artículo 135 CE) para que no opere como un límite desproporcionado a los derechos de las mujeres? ¿Qué papel deberían jugar instrumentos como el análisis de impacto de género de las normas y presupuestos públicos en el control de constitucionalidad?**

Mª Luisa Balaguer: Es muy difícil garantizar el futuro, o cerrar con llave algunos derechos de los que hay podemos disfrutar las mujeres, porque en un sistema representativo de representación periódica, los vaivenes ideológicos no pueden

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-9
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.12381

evitarse en los resultados electorales, pero algunas medidas podrían contribuir a que no se produzca esta reversión e incluso algunas de ellas están legisladas como la del impacto normativo de género en los presupuestos generales del Estado o de algunas Comunidades autónomas. Lo que ocurre es que las valoraciones de impacto de género no se estudian con profundidad, y a menudo constituyen reiteraciones de otros informes, y en algún caso en lo que se ha recurrido a los tribunales, la misma ausencia del preceptivo informe de género, como en un proyecto urbanístico, se ha llegado a desestimar por parte del tribunal considerando que no afectaría al fallo de la sentencia.
Por lo tanto, la inserción del feminismo en algunos sectores sociales, políticos y económicos, sigue siendo una asignatura pendiente.

Rev. Atlánticas: **El lenguaje constitucional y jurídico ha sido señalado por la crítica feminista como un espacio donde se reproduce la invisibilización de las mujeres, tanto a nivel formal como conceptual. Más allá de la cuestión del lenguaje inclusivo, ¿cómo influye la estructura lingüística de los textos constitucionales y las resoluciones judiciales en la construcción de subjetividades jurídicas y en la definición del sujeto constitucional? En su experiencia como redactora de sentencias y votos particulares, ¿qué estrategias discursivas ha desarrollado para incorporar una perspectiva feminista que trascienda lo meramente formal y logre incidir en las categorías fundamentales del derecho constitucional? ¿Considera que la transformación del lenguaje jurídico es una dimensión esencial para la consecución de una justicia constitucional con perspectiva de género?**

Mª Luisa Balaguer: En lo que se refiere a un adecuado lenguaje de género, han sido inútiles hasta ahora los esfuerzos por hacernos entender social e institucionalmente, que han identificado el lenguaje de género con la duplicidad del género por partícula masculina o femenina. No ha habido forma de que ni la propia Real Academia de la Lengua considere la posibilidad de integrar progresivamente el lenguaje no discriminatorio. Muchas constitucionalistas y lingüistas hemos escrito artículos muy fundamentados en este sentido y no ha habido manera de que siquiera se tome en consideración esta idea.

Rev. Atlánticas: **Por último, asistimos actualmente a un contexto internacional donde, junto a avances significativos en materia de igualdad, emergen movimientos que cuestionan derechos ya consolidados de las mujeres y que incluso se traducen en normas y políticas regresivas. Ante este escenario, ¿qué herramientas jurídico-constitucionales pueden utilizar los tribunales constitucionales para blindar los avances en igualdad frente a posibles retrocesos legislativos? ¿Cómo pueden articular el diálogo con otros tribunales internacionales para fortalecer esta protección?**

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-9
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.12381

Mª Luisa Balaguer: Hasta este momento, y sin poder predecir que evolución irá tomando, las reversiones no están siendo significativas. Son más bien de gestión política, y a menudo enmascaradas en el ejercicio de otros derechos, pero hay que tener en cuenta que es muy fácil que pese a estar consolidadas situaciones de derechos muy consolidados en el tiempo, es solamente la seguridad jurídica y la vigencia de las normas la que garantiza que los derechos permanezcan socialmente activos.

Respecto del diálogo con otros tribunales, no es fácil si tenemos en cuenta que no están tan avanzados en derechos como nosotras. Por poner un ejemplo, la gestación subrogada en nuestro ordenamiento está permitiendo una aplicación más digna con el cuerpo de las mujeres que la de los tribunales franceses, e igual ocurre en otros ordenamientos.

Estos problemas exigen una normatividad mucho más taxativa en general de la que tenemos hoy, pero ciertamente eso solo es posible desde posiciones políticas que acepten la igualdad entre las mujeres y los hombres, más allá de su tenor literal.

ATLÁNTICAS-Rev. Int. Est. Fem. 2025, 10, 2, 2-9
ISSN: 2530-2736|| https://dx.doi.org/10.17979/arief.2025.10.2.12381